



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

### CERTIFICA

Que en la Sesión del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 21 diciembre de 2005, se ha adoptado el siguiente

### ACUERDO

Por el que se aprueba la:

**RESOLUCION POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ENTIDAD TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. CONTRA LA RESOLUCIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTES PRESENTADOS POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. REFERIDOS AL EJERCICIO 2003.**

En relación con el recurso potestativo de reposición interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. referidos al ejercicio 2003, el Consejo de esta Comisión ha adoptado en su sesión núm 44/05, la siguiente Resolución:

Resolución de 21 de diciembre de 2005, recaída en el expediente AJ 2005/1274

### HECHOS

**PRIMERO.** En fecha 14 de julio de 2005, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aprobó la Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. (en adelante TESAU) referidos al ejercicio 2003. La citada Resolución, acordaba lo siguiente:

***“Primero.- Declarar que la aplicación para el ejercicio 2003 del Sistema de Contabilidad de Costes utilizado por Telefónica de España, S.A.U. en general es conforme a los criterios establecidos por la Resolución de esta Comisión de fecha 15 de julio de 1999, asumiendo y haciendo públicos los***



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*márgenes por actividades que figuran en la columna “márgenes corregidos” del cuadro incorporado al apartado VI.2.*

**Segundo.-** *Requerir a Telefónica de España, S.A.U. a que introduzca en su Sistema de Contabilidad de Costes, para aplicaciones sucesivas, las modificaciones a que se refieren los apartados V.1 y V.3.”*

**SEGUNDO.** Mediante escrito de fecha de 16 de agosto de 2005, con entrada en el Registro de esta Comisión ese mismo día, TESAU interpuso recurso potestativo de reposición contra la resolución antes referida, solicitando que se revisara el contenido de la misma sobre la base de las siguientes alegaciones:

**Primera.- Anulabilidad de la Resolución recurrida por vulneración del artículo 11.5 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel.) y concordantes, en cuanto a la imposición de obligaciones objetivas y proporcionadas, en lo relativo al estudio sobre la imputación de costes de comercialización correspondientes a “venta de la red propia” y a “Atención 1004”.**

Señala TESAU que la obligación impuesta por la Resolución recurrida consistente en la realización de un estudio relativo a la imputación de costes de comercialización correspondientes a “Venta de la red propia” y a “Atención 1004”, constituye una vulneración de los principios de objetividad y proporcionalidad consignados en el artículo 11.5 de la LGTel.

Argumenta que las Auditorías llevadas a cabo demuestran que en TESAU no se está produciendo el fenómeno de traslado de costes de los servicios minoristas hacia los servicios mayoristas, principal causa de imposición de la obligación de separación de cuentas, siendo este uno de los motivos por los que entiende que la realización del estudio resulta desproporcionada y carente de objetividad.

Apunta además que se está llevando a cabo en esta Comisión un análisis del mercado minorista de voz, del que se podría derivar la imposición a TESAU de medidas diferentes a la separación contable, con lo que la realización del estudio supondría un esfuerzo vano.

Pone de relieve asimismo que tal y como se indicaba en las notas adjuntas a los informes de auditoría que han acompañado a los resultados del ejercicio 2004, se ha modificado el criterio de reparto de la actividad de “Distribución comercial”. Señala que este criterio es más directo que el anterior y que consiste en el reparto de estos costes en base a las comisiones realmente



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

abonadas que están relacionadas directamente con los productos/servicios vendidos.

**Segunda.- Anulabilidad de la Resolución recurrida por vulneración del artículo 11.5 de la LGtel. y concordantes, en cuanto a la imposición de obligaciones objetivas y proporcionadas, en lo relativo a la auditoría específica del inventario.**

TESAU recuerda que en el ejercicio 2001 presentó un trabajo específico de verificación del inventario con la contabilidad de costes de dicho periodo, cuyas conclusiones señalaban que, tras diversas pruebas de verificación, no se habían encontrado errores significativos en ninguna de las agrupaciones de activos inventariados. Argumenta que, desde entonces, ninguna de las empresas que han llevado a cabo la auditoría externa contratada por la Comisión para verificar la contabilidad de costes de dicha entidad ha encontrado ninguna evidencia que haga pensar que los sistemas de control interno relacionados con el inmovilizado puedan producir errores.

Por ello entiende que no existe ningún indicio que haga sospechar de los datos aportados por TESAU y que consiguientemente la realización de una auditoría específica del inventario constituye una obligación desproporcionada y falta de objetividad, contraria al artículo 11.5 de la LGTel.

En lo que respecta a la sobrecapacidad de los activos y si ésta se encuentra justificada, TESAU pone de manifiesto que los ajustes necesarios no serían de aplicación al estándar de corrientes sino en todo caso al estándar de costes incrementales, tal y como reconoce la Resolución recurrida.

Finalmente propone que dentro de los trabajos de auditoría contratados por la Comisión para la contabilidad de costes de TESAU en el ejercicio 2004, se prevea algún tipo de actuación que garantice aún más la fiabilidad del inventario.

**Tercera.- Nulidad de pleno derecho de la Resolución recurrida según los artículos 62.1 a) y 62.1 e) de la LRJPAC, ya que la falta de motivación de la misma genera indefensión (en contra del artículo 24 de la Constitución Española) y supone prescindir del procedimiento.**

Manifiesta TESAU que la Resolución recurrida le impone la realización de los estudios a que se refieren las anteriores alegaciones de la recurrente sin la debida justificación, tal y como exigiría el deber de motivación de los actos administrativos, recogido en el artículo 54 de la LRJPAC. Añade, con respecto a



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

la obligación de elaboración de un informe relativo a la imputación de costes de comercialización correspondientes a "*Venta de la red propia*" y a "*Atención 1004*", que el deber de motivación es mayor ya que no sólo impone una obligación al administrado sino que además supone un cambio de criterio de la Comisión con respecto a sus Resoluciones anteriores (artículo 54.1 c) de la LRJPAC).

Cita a continuación jurisprudencia en el sentido de que la motivación del acto administrativo constituye una garantía para el administrado que le permite impugnar dicho acto criticando las bases en que se funda, favoreciendo de este modo el control jurisdiccional de la Administración y garantizando el ejercicio del derecho de defensa de los interesados.

**TERCERO.** - Mediante escrito del Secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 13 de septiembre de 2005, se cumplió el trámite de información al interesado previsto en el artículo 42.4 de la LRJPAC.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### A. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PROCEDIMENTALES

#### Primero.- Calificación.

El artículo 107 de la LRJPAC establece que contra las resoluciones, entre otros actos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley.

La recurrente califica expresamente su escrito como recurso de reposición, por lo que teniendo en cuenta lo anterior y que las Resoluciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ponen fin a la vía administrativa procede, a tenor de lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, que prevé que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, calificar el escrito presentado como recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de esta Comisión de fecha 14 de julio de 2005.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

### **Segundo.- Competencia y plazo para resolver.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, la competencia para resolver el presente recurso corresponde al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por ser el órgano administrativo que dictó el acto impugnado.

El presente recurso deberá ser resuelto y su resolución notificada en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su interposición, según lo establecido en el artículo 117.2 de la misma ley y, siempre teniendo en cuenta las posibles suspensiones que afecten al transcurso del plazo máximo.

### **Tercero.- Admisión a trámite.**

El recurso de reposición de la entidad TESAU ha sido interpuesto cumpliendo con los requisitos de forma establecidos en el artículo 110.1 de la LRJPAC. Asimismo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 117 de la misma Ley, por lo que, teniendo en cuenta lo anterior, procede admitirlo a trámite.

## **B. FUNDAMENTOS JURÍDICOS MATERIALES.**

**Primero.- Sobre la anulabilidad de la Resolución recurrida por vulneración del artículo 11.5 de la LGTel y concordantes, en cuanto a la imposición de obligaciones objetivas y proporcionadas, en lo relativo al estudio sobre la imputación de costes de comercialización correspondientes a “venta de la red propia” y a “Atención 1004”.**

TESAU entiende que la realización de un estudio relativo a la imputación de costes de comercialización correspondientes a “Venta de la red propia” y a “Atención 1004”, resulta desproporcionada y no objetiva. En su opinión, TESAU ya está aplicando el principio de causalidad en cuanto a estos costes, en la medida en que se está utilizando un criterio de distribución que tiene relación directa con la actividad desarrollada por los vendedores.

Por otra parte, TESAU señala que se ha modificado el criterio de reparto de la actividad de “Distribución Comercial” utilizando un criterio más directo como es el reparto de costes en base a las comisiones realmente abonadas que están relacionadas directamente con los productos/servicios vendidos.

Sobre esta alegación es preciso señalar que como Ernst & Young identificó en su proceso de auditoría, TESAU no habría aportado el estudio requerido por esta Comisión en su Resolución de 12 de febrero de 2004, en la que se pedía que



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

justificase los porcentajes de ponderación utilizados en el reparto a servicios de los costes registrados en el sub-centro de actividad *“Venta de la red propia”* (75% aplicable a los ingresos y el 25% aplicable a las ventas).

Por otra parte, como la propia operadora explica en su Manual Interno de Contabilidad de Costes correspondiente al ejercicio 2003, el centro de actividad asignable directamente a servicios (CAAD) de *“Comercialización”* comprende *“la actividad necesaria para la realización de acciones comerciales de ventas a través de medios propios y ajenos, incluidos todos aquellos necesarios para llevar a término la misma, entre otros los de consultoría y asesoramiento”*, y en el documento de Motivos de Cargo y Abono que el criterio de asignación a servicios de los costes de comercialización registrados en este CAAD se realiza *“en función de las ventas e ingresos por servicio, en proporción a la actividad dedicada”*.

Independientemente del criterio de asignación detallado en la documentación del Sistema de Contabilidad de Costes, Ernst & Young comprobó que de forma previa al reparto a servicios de los costes registrados en el CAAD *“Comercialización”*, el mismo se divide en varios sub-centros de actividad, que reparten costes a servicios de forma independiente en función de criterios de reparto específicos definidos para cada uno de ellos. Además, estos criterios de reparto no están descritos ni en el Manual Interno de Contabilidad de Costes ni en el documento de Motivos de Cargo y Abono y sin embargo serían de gran utilidad su introducción, de ahí la necesidad de incorporarlos en dichos manuales como explícitamente estableció esta Comisión en su Resolución de 12 de febrero de 2004.

En consecuencia, el requerimiento del estudio tiene como principal objetivo reflejar la dedicación efectiva del personal de venta de su red propia, sirviendo como base para verificar la causalidad de los porcentajes de ponderación utilizados en el reparto a servicios de los costes registrados en el sub-centro de actividad *“Ventas de la red propia”*, consiguiendo así dotar al sistema contable de una mayor transparencia y causalidad entre los distintos generadores de costes, sus centros de actividad y su posterior imputación a servicios. Por ello, no puede entenderse que la elaboración de este estudio resulte desproporcionada o carezca de objetividad.

**Segundo.- Sobre la anulabilidad de la Resolución recurrida por vulneración del artículo 11.5 de la LGtel. y concordantes, en cuanto a la imposición de obligaciones objetivas y proporcionadas, en lo relativo a la auditoría específica del inventario.**

TESAU señala que en la contabilidad de costes del ejercicio 2001 ya presentó un trabajo específico de verificación del inventario en el que se concluía que tras



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

diversas pruebas de verificación a partir de una muestra representativa, no se habían encontrado errores significativos en ninguna de las agrupaciones de activos inventariados. Por tanto, en su opinión, y teniendo en cuenta el estudio entregado en 2001 así como las comprobaciones llevadas a cabo por las empresas contratadas por esta Comisión a lo largo de los últimos años, no existe ningún indicio que lleve a sospechar de la fiabilidad de los datos aportados por TESAU, en consecuencia, consideran desproporcionada y no objetiva la elaboración de una auditoría específica del inventario.

En este sentido, esta Comisión considera oportuno resaltar que el objeto de dicho proceso de auditoría consiste en verificar la correcta valoración de los inmovilizados de la operadora bajo el estándar de corrientes, para ello será necesario desglosar para cada uno de los grupos de activos que componen el inmovilizado de la operadora, el estado de uso y los diferentes grados de utilización de los mismos, distinguiendo la sobrecapacidad justificada y la no justificada, y de este modo, completar y tener plena confianza en la valoración a corrientes de los activos, independientemente de que dicho proceso afecte también a otros estándares contables. En el estudio llevado a cabo por Ernst & Young, la auditora explícitamente señala en su informe que no se ha podido verificar el grado de uso de los activos así como si la posible sobrecapacidad de los mismos se encuentra justificada o no justificada.

Efectivamente, en los procesos de auditoría llevados a cabo no se ha profundizado en el conocimiento del grado de utilización de los activos, de tal forma que se identifiquen qué activos se encuentran en uso en el ejercicio en curso de los que no son operativos, o de los que aún siéndolo, presentan diferentes grados de infrautilización, distinguiendo los activos que cuentan con una sobrecapacidad justificada y no justificada, siendo éste un factor determinante de cara a la valoración de los activos bajo el estándar de costes corrientes, así como para determinar si los costes calculados originados por los mismos deben ser asignados a servicios, o por otro lado, deben asignarse a la cuenta de *“Servicios no atribuibles al estándar de costes”*.

De aquí la necesidad de presentar un estudio ad hoc, en el que se desglose para cada uno de los grupos de activos que componen su inmovilizado, el estado de uso y los diferentes grados de utilización de los mismos, incorporando en dicho estudio el concepto de grado de utilización o sobrecapacidad justificada y no justificada antes mencionado.

**Tercera.- Sobre la nulidad de pleno derecho de la Resolución recurrida según los artículos 62.1 a) y 62.1 e) de la LRJPAC, ya que la falta de motivación de la**



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

**misma genera indefensión (en contra del artículo 24 de la Constitución Española) y supone prescindir del procedimiento.**

TESAU entiende que las obligaciones que le impone la resolución recurrida, y en concreto las relativas a la elaboración de un estudio sobre la imputación de costes de comercialización correspondientes a “*Venta de la red propia*” y a “*Atención 1004*” y la realización de una auditoría específica del inventario, no aparecen suficientemente motivadas en la Resolución recurrida, en contra de lo previsto en el artículo 54 de la LRJPAC.

Argumenta además que en lo relativo a “*Venta de la red propia*” y a “*Atención 1004*”, el deber de motivación era mayor, ya que la obligación de realizar un estudio sobre estos costes supondría un cambio de criterio con respecto a lo mantenido con anterioridad por la Comisión, en concreto, en la Resolución de 12 de febrero de 2004 sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. referidos al ejercicio 2002.

A este último respecto, es preciso poner de manifiesto en primer lugar que no ha existido un cambio de criterio de esta Comisión con respecto a la Resolución citada por la recurrente, ya que dicha Resolución de 12 de febrero de 2004 señalaba expresamente lo siguiente:

*“La revisión de la imputación de costes comerciales muestra que el criterio empleado por Telefónica es objetivo. No obstante, dada la importancia de esta cuenta, el criterio podría mejorarse mediante la realización de un estudio que mostrase la ponderación entre costes de ‘Venta de la red propia’ asignados en base a ventas y en base a ingresos (actualmente 25% frente a 75%) (...)”.*

La adopción de esta determinación fue fruto del informe elaborado por la auditora externa (Analysys) contratada por la Comisión para verificar la contabilidad de costes de TESAÚ en dicho ejercicio, tal y como consta en el resumen de los resultados de dicha auditoría que consta recogido en la Resolución:

*“La revisión de la imputación de costes comerciales es especialmente relevante dado el monto de esta cuenta. El criterio de imputación debe mejorarse mediante la realización de un estudio que muestre la ponderación entre (1) la parte de los costes de ‘Venta de la red propia’ (vendedores propios de Telefónica) asignados en base a ventas; frente a (2) los asignados en base a ingresos (actualmente 25% frente a 75%). “*

Por su parte, la Resolución recurrida, no se limita a imponer la obligación de elaboración de un estudio tal y como parece señalar la recurrente. Por el contrario,



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

una vez puesto de manifiesto por la Auditora externa Ernst & Young, entre otras cuestiones, que no se había llevado a cabo el estudio referido en la Resolución de 12 de febrero de 2004, se dio traslado del informe emitido por la Auditora a TESAU para que efectuara las alegaciones que estimara pertinentes, que, en lo que aquí afecta, fueron valoradas por Ernst & Young en el sentido que consta en la Resolución recurrida:

*“De acuerdo con el principio de causalidad definido en la Resolución de principios, criterios y condiciones de fecha 15 de julio de 1999, los costes deberían ser asignados a los diferentes servicios en función de la dedicación de los recursos, esto es, en función de la dedicación efectiva del personal de venta de la red propia. Efectivamente, el esfuerzo y dedicación de recursos de los comerciales en la captación de un nuevo cliente genera unos ingresos en el ejercicio en curso y unos ingresos potenciales mayores en ejercicios futuros.*

*Por tanto, y teniendo en cuenta los comentarios anteriores, se considera que la Operadora debería realizar un estudio que reflejase, para cada uno de los servicios, la dedicación efectiva del personal de venta de su red propia, por lo que no se estima la alegación de Telefónica.”*

Por lo que respecta a la auditoría específica del inventario, la Resolución recurrida, sintetizando lo expuesto por Ernst & Young al respecto, establece lo siguiente:

*“Como parte de los procedimientos de revisión del Sistema de Contabilidad de Costes del ejercicio 2003 realizado por Ernst & Young se ha verificado para una muestra de activos que dentro del procedimiento de valoración del inmovilizado en el estándar de costes corrientes seguido por la Operadora no se han tenido en cuenta los activos fuera de uso, aunque no se ha podido verificar el grado de uso de los mismos así como si la posible sobrecapacidad de los mismos se encuentra justificada o no justificada. En consecuencia, y con el objeto de verificar la correcta valoración de los inmovilizados de Telefónica en el estándar de costes corrientes se considera necesaria la presentación de un estudio en el que se desglose para cada uno de los grupos de activos que componen el inmovilizado, el estado de uso y los diferentes grados de utilización de los mismos, incorporando en dicho estudio el concepto de grado de utilización o sobrecapacidad justificada y no justificada antes mencionado.*

*No obstante, teniendo en cuenta la complejidad que supone preparar un estudio de activos tal y como se ha definido, se considera que el mismo debería ser presentado dentro del proceso de revisión del Sistema de Contabilidad de Costes del ejercicio 2005.”*



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Queda claro, por tanto, que la Resolución fija, de forma clara, las razones del establecimiento de la obligación de realizar de los estudios a que se refiere la recurrente. A este respecto, es preciso tener en cuenta la Sentencia Tribunal Supremo de 18 abril 1988, que define el alcance del deber de motivación en el siguiente sentido: *“la motivación de los actos administrativos en general y de las denegaciones de licencias de urbanismo en particular, (...), contemplada como ha de contemplarse en su aspecto externo, o de dar a conocer al administrado las razones o motivos que han llevado a una decisión ordinariamente desfavorable para el mismo, ha de entenderse, no en el sentido de comprender una exhaustiva y completa referencia fáctica y jurídica del proceso mental conducente a ella, sino en el de, cual la expresión legal «sucinta referencia» denota, patentizar sustancialmente el juicio administrativo de forma tal, que el interesado comprenda el por qué la decisión administrativa se orienta de una determinada manera y, sin indefensión alguna, que de existir sería la que haría anulable al acto conforme al artículo 48.2 de dicha Ley Procedimental, pueda impugnar lo que le perjudique(...)”*.

En todo caso, la decisión adoptada por la Resolución de la Comisión se funda en el informe elaborado por la auditora externa Ernst & Young, que forma parte del expediente del que trae causa el presente recurso. Sobre este asunto se ha pronunciado la jurisprudencia, que ha señalado que *“[e]s doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y constante jurisprudencia de esta Sala la que considera idónea, para el cumplimiento de los fines de la motivación del acto administrativo - dar a conocer al destinatario las auténticas razones de la decisión que se adopta y permitir frente a ella la adecuada defensa-, la remisión explícita o implícita a los informes y documentación obrante en el expediente”* (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 mayo 1998).

Así pues, no cabe entender que la Resolución haya incurrido en falta de motivación en la imposición de las obligaciones a que se refiere el recurso interpuesto. Es decir, si bien TESAU puede no compartir los motivos que condujeron a su establecimiento, como ha quedado expuesto, resulta claro que sí que pudo conocer los motivos en que se fundaba. En este sentido, el informe de auditoría que justifica su imposición constaba en el expediente y se le dio traslado del mismo en su condición de interesada, favoreciendo de este modo el ejercicio de su derecho de defensa. Dicho informe constituye la principal motivación de la decisión impugnada, circunstancia que reiterada jurisprudencia ha amparado, no obstante, como ha quedado de manifiesto, incluso del resumen recogido en la Resolución recurrida, se pueden extraer las razones de la decisión de la Comisión de forma suficiente para cumplir con las exigencias del artículo 54 de la LRJPAC de acuerdo con la jurisprudencia citada.

Vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

### RESUELVE

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra la Resolución de esta Comisión de fecha 14 de julio de 2005, sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes presentados por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., referidos al ejercicio 2003, por estar plenamente ajustada a Derecho.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado, que resuelve un recurso potestativo de reposición, no puede interponerse de nuevo dicho recurso de reposición. No obstante, contra la misma puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

Vº Bº

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE

Jaime Almenar Belenguer

Reinaldo Rodríguez Illera